

## Correo de Europa

# La crisis que viene

## Julio César Herrero

Intentar resolver problemas sociales mediante matrices en las que los ciudadanos no son más que números es cada día más común. El Gobierno español ha sido un buen ejemplo de esta miopía.

Una de las consecuencias más perniciosas de la larga crisis que azota a algunos países desde el año 2007 es la modificación del contexto a partir del cual interpretar lo que ocurre. Parece haberse afianzado la idea de que el problema que afrontan naciones como España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda o Estados Unidos tiene un carácter exclusivamente económico. De hecho, al mencionar la palabra *crisis*, la referencia es evidente. En el caso de los países europeos, la solución pasa por la consecución de determinados objetivos de déficit, inflación y deuda pública en un tiempo determinado. Eso es lo que dictamina la Unión Europea. Todo se justifica con tal de obtener esos propósitos. Los gobiernos nacionales deben adoptar medidas para conseguir esos porcentajes en fechas arbitrariamente establecidas, muy exigentes pero que no son cuestionables.

Como si de una carrera se tratara, el éxito se mide por la capacidad de llegar a la meta. No importa de qué manera: lo importante es llegar. El fin justifica cualquier procedimiento empleado para alcanzarlo. Y en ese correr, demasiado tortuoso para demasiada gente, se afianza otra crisis mucho más profunda y menos importante para los organismos expendedores de recetas económicas: la social.

La desigualdad ha aumentado de forma inquietante en los últimos años. Según el Informe Oxfam de enero de 2014 ("Gobernar para las élites: Secuestro democrático y desigualdad económica"), 7 de cada 10 personas viven en países donde este problema se ha in-

crementado notablemente desde 1984. Si nos centramos en España, antes de 2008 el 20% de los españoles más ricos ganaba 5.3 veces más que el 20% más pobre. En 2011, tres años después de que la crisis comenzara, los ricos habían conseguido agrandar sus ganancias casi dos puntos (7.5 veces). Resulta muy difícil de entender cómo una circunstancia que, por una parte, arrasa con todo lo que encuentra a su paso, obliga a cerrar empresas y arroja al paro a millones de ciudadanos, por otra parte permite mejorar los resultados a unos pocos. Casualmente a los que no lo necesitan. Aunque es muy fácil de explicar si no se pierde de vista que los únicos criterios para salir de esta situación son exclusivamente económicos. Cuando lo único que importan son los balances, los ciudadanos se vuelven prescindibles siempre que supongan una traba para la consecución de aquellos.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (noviembre de 2013), 21.6% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, con menos de 7 mil euros al año. En un millón 800 mil hogares no entra ni un solo euro pues tienen a todos sus miembros en paro, cuya tasa se sitúa en casi 26%. Si nos centramos en el paro juvenil, la cifra asciende vertiginosamente hasta casi 55 por ciento.

Sin embargo, desde hace tres meses, el Gobierno español se está esforzando para que cale la idea de que se está superando la crisis y de que lo peor ya ha pasado. La balanza comercial arro-



ja resultados positivos: la prima de riesgo se ha reducido notablemente y parece que se ha superado la recesión, al menos técnicamente. Pero estos datos tienen que ver con la macroeconomía. No existe ningún indicador asociado a la supuesta salida que refleje la reducción de la desigualdad. La solución pasa por variables macroeconómicas porque la crisis se plantea, sistemáticamente, en términos económicos. Es más, algunas de las políticas que se han desarrollado para ponerle fin conllevan necesariamente ahondar en la crisis social. Pero tan inquietante conclusión parece no importar ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la Unión Europea, ni al Banco Central Europeo. Para sus objetivos de déficit, inflación y deuda, no es relevante la cantidad de familias que pasan hambre, que no ingresan nada al mes, que no tienen ni un solo miembro con empleo...

Pero la desigualdad económica genera un escenario de crisis más grave aún, si bien no es la que importa a los mercados: la democrática. La desconfianza en las instituciones, la desafección política, la sensación justificada de desprotección por parte del Estado cuando más se le necesita tienen mucho que ver con la frustración que produce en los ciudadanos sentirse una herramienta más (tremendamente útil o perfectamente prescindible) para la consecución de metas económicas que benefician a unos cuantos. Aunque la recuperación de esa otra crisis no parece importar a los organismos internacionales ni a los gobiernos. Al menos por el momento. **EstePaís**

**JULIO CÉSAR HERRERO** es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su actividad docente y de investigación con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha asesorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.